

Dante Vera, ex jefe del Gabinete de Asesores del ministro del Interior, quien se encargó directamente del tema llave, analiza en esta entrevista las opciones que se barajaban en dicho ministerio frente al problema y ofrece su visión de fondo del conflicto.

conversación con:

Dante Vera

llave:

Qué se pudo hacer y qué no



cc *on qué criterios manejó el Ministerio del Interior el conflicto de llave?*

En el ministerio planteamos una ecuación con tres variables: primero, la legitimidad política que teníamos (según las encuestas, 8 por ciento); segundo, el cálculo del posible costo social; y, tercero, el impacto político nacional. Según esa ecuación medimos cuánta fuerza era conveniente emplear en un conflicto local.

Ahora, ¿qué nos faltó? ¿Enviar más policías? ¿Agarrar al alcalde y no dejarlo entrar en el pueblo? Probablemente, que la Comisión Nacional vaya antes para consolidar el encauzamiento político del problema que ya habíamos iniciado.

¿Cuál es el tema de fondo en llave?

El tema de fondo es que hay un proceso de urbanización, y los centros poblados menores adquieren más protagonismo y quieren que su alcalde delegado tenga más poder. La mayoría de esos centros poblados aspiran a convertirse en distritos y, por lo tanto, desde que el centro poblado empieza a crecer entra en disputa con el distrito, porque algún día quiere "independizarse", y entonces el distrito lo mira mal.

Estos centros poblados exigen presupuesto para ellos y ejercen una presión por las expectativas creadas y la poca plata que hay en los municipios provinciales y distritales, a pesar de que las transferencias para la provincia de llave casi se han duplicado.

¿Qué sucedió realmente en llave?

Sandoval, el teniente gobernador, se hizo de los centros poblados y aisló al alcalde, quien resultó el perdedor frente a esta presión. Decían: "Él se ha robado la plata y en vez de dar para tu caminito, para tu puentecito, para tu corral, para lo que sea, él se ha robado tu plata", cosa que además no está probada. Los centros poblados menores a los que les es muy útil la miseria que les pueda llegar del presupuesto municipal se alzaron.

El problema es entonces la lucha por el control de los recursos...

Es la lucha por el poder que permite acceder a los recursos.



Si uno no va más allá de la pelea entre Sandoval y el alcalde linchado, se queda solamente en los personajes.

El fenómeno de fondo es que el proceso de descentralización significa redistribución del poder y de recursos, y las élites regionales, provinciales, locales y hasta los de más abajo se disputan para ubicarse en este proceso de descentralización. Ubicarse significa este 'recursito' para ti, esta atribución para mí, este espacio de poder para mí... Y como la disputa no se da entre partidos políticos nacionales ni entre entidades locales institucionalizadas, entonces se convierte en una disputa entre camarillas, entre caciques con una educación democrática cero. Todos provienen del discurso de Patria Roja y Puka Llacta, que es un discurso confrontacional en el que no existe la capacidad de diálogo y acuerdo, sino únicamente la rendición del adversario.

¿Significa eso que el Perú no está preparado para la democracia?

Más bien hay que saber en qué país estamos y simplemente recordar las conclusiones de la CVR para, partiendo de esa claridad, decir cómo construir democracia o qué tipo de democracia puede salir de acá. Nadie puede desconocer que es una cultura aimara, nadie puede discutir que hay una exclusión de los aimaras. Pero pensar que esto es un problema de los aimaras y que el linchamiento es propio de los aimaras, es un absurdo.

¿Cómo se pueden afrontar conflictos como el de llave?

Hay que cambiar la ley de participación y revocatorias; hacer más flexible este proceso para que no ocurran estos "imposibles jurídicos"; ponerle canales legales, canales políticos a los conflictos que hay abajo, en la sociedad local. El Estado funciona con una lógica de derecho positivista y el pueblo lo hace con otro tipo de derecho, el derecho consuetudinario, el de los hechos. Cuando queremos que ambos encajen, chocan.

Actualmente el país parece un hervidero. ¿Qué se puede hacer?

Creo que tiene que ver con que en estos meses se inicia la discusión del plan de desarrollo concertado y el presupuesto participativo para el próximo año. Además, se ha cerrado el proceso de revocatoria de alcaldes. Es una cosa muy ventajosa, pero la discusión de los presupuestos fácilmente se convierte en una olla de presión, en un infierno terrible. Suelen ser problemas locales que después revientan y se convierten en conflictos mayores, y la clase política los aprovecha para sus propios intereses, como por ejemplo para orquestar la caída del gobierno.

Pero los conflictos a raíz de inversiones mineras no son conflictos locales, tienen que ver con el modelo de desarrollo...

Pero no necesariamente tienen un discurso por un nuevo gobierno; no están articulados por eso. Unos no quieren la inversión minera, otros desean que la municipalidad les dé más recursos, otros quieren que se acepte el excedente de la hoja de coca a sabiendas de que va al narcotráfico. Pero no hay un catalizador. Ojalá lo hubiera, para que se canalizara políticamente el conflicto y no corriera sangre. Ojalá que el APRA pudiera catalizar todo eso. Ojalá que la izquierda o los que creen en la democracia popular tuvieran capacidades para canalizar esas protestas y hacerlas confluir en una pro-

puesta de gobierno. Lamentablemente, son incapaces de hacerlo.

Muchos conflictos parecen tener como fondo el proceso de descentralización...

La gran decisión de este gobierno, del país, es la descentralización. Está por lo menos abierto el canal, porque si mantenemos el centralismo imperante la situación sería peor. Entonces hay que definir las responsabilidades nacionales sobre cómo acelerar las transferencias y cómo articular un nuevo pacto social, un nuevo poder en el país, en el cual el Ejecutivo tiene que renunciar a ciertas potestades, donde el Estado nacional ya no es el que soluciona los problemas, sino que debe compartir las tareas con autoridades regionales y locales.

Lo que tiene que cambiar es el discurso de las autoridades locales. Tienen que saber cómo administrar, cómo gestionar, cómo reproducir el desarrollo. Tienen que saber cuáles son sus ventajas y no solo sus pobreza.

Al mismo tiempo que estalló el conflicto en llave se produjo el de Huancabamba, donde estuvieron presentes muchos policías. Pareciera que la protección estatal de la inversión minera era más importante que un problema aparentemente local como el de llave...

Cada conflicto tiene su propio escenario. En el caso de Huancabamba se agotaron las

posibilidades de diálogo, y no se podía permitir una "marcha pacífica para tomar la mina", pues el mismo derecho que tienen los pobladores para expresar su protesta lo tiene un inversionista que ha cumplido con los requisitos legales que le exige el Estado para proteger su inversión. Pero en ambos casos se actuó bajo el mismo principio: uso proporcional de la fuerza para restablecer el orden público y evitar el costo social.

¿Qué soluciones a los conflictos locales están disponibles si uno no quiere recurrir a la política de mano dura, y, por otro lado, se nota una falta de voluntad para el diálogo?

Son los azuzadores del conflicto los que han demostrado falta de voluntad para el diálogo, los violentistas y quienes solo aceptan que su posición sea la vencedora aunque resulte perjudicial para la nación, como es el caso de los cocaleros que exigen la no erradicación de la coca así sea que estén destruyendo bosques y reservas nacionales.

Desde el Mininter se impulsaron cuatro mecanismos: la inteligencia predictiva, el comité de análisis del conflicto, la acción de las autoridades de manera multisectorial y descentralizada en el escenario del conflicto y la acción de la PNP. Todo orientado a encontrar soluciones, evitar los desmanes y el caos y sancionar a los responsables de delitos como el linchamiento del alcalde, que no puede quedar impune. ■